

Att. Armien Wertz-Ausland

¿PODRA DUARTE DEMOCRATIZAR EL SALVADOR?

Con 752,625 votos sobre un total de 1,524,679 y una ventaja de 100,884 sobre su contrincante de extrema derecha, el ex-mayor D'Aubuisson, llega a la presidencia de la república el candidato de la Democracia Cristiana, Ingeniero Napoleón Duarte. En un país democrático, como la Alemania Federal, este resultado sería suficiente para que el triunfador pudiese gobernar conforme a las atribuciones que le concede la Constitución. Pero, ¿es así en el caso de El Salvador? ¿Podrá Duarte disponer del suficiente poder para llevar a cabo su programa político?

La respuesta no puede ser optimista. El Salvador no es un país democrático como Alemania Federal. No es sólo que sea muy distinto su PNB per capita (13.450\$ para Alemania y 650\$ o menos para El Salvador) con todas las consecuencias que esto trae en desnutrición, chabolismo, paro laboral, analfabetismo, etc.; es que no son comparables sus estructuras. Las elecciones en los países occidentales implican una estructura democrática real; las elecciones en El Salvador se dan en una estructura nacional no democrática y difícilmente conducirán a una democratización verdadera del país, más allá de lo que puedan suponer unas elecciones relativamente libres y representativas de la voluntad popular.

Esta democratización real del país que podría traer avances serios en la pacificación implica ciertas tareas urgentes. Implica el poner término a la violación de los derechos humanos y a la carrera de la violencia que ha ocasionado más de 45.000 asesinatos políti-



cos en los últimos cuatro años y medio. Implica el sometimiento de la Fuerza Armada al poder civil, según lo ordena la Constitución. Implica la constitución de un poder judicial respetable que pueda hacer justicia respecto de los ciudadanos y respecto del Estado. Implica el que puedan regresar al país más de medio millón de salvadoreños que en estos últimos cuatro años se ha visto forzados a abandonarlo por razones políticas. Implica la posibilidad de organización política de todas las fuerzas sociales sin que corran peligro la vida o la libertad de sus componentes. Implica el fortalecimiento y respeto de los sindicatos en la ciudad y en el campo. Implica reformas económicas que quiten el poder a la oligarquía y se lo den a la mayoría del pueblo. Implica el poner fin al estado de sitio que el propio Duarte impuso al país hace más de cuatro años. Implica recuperar la soberanía nacional para que el pueblo salvadoreño sea realmente dueño de las disposiciones que más le atañen, especialmente las referentes a la guerra y a la negociación. Implica finalmente el que se den elecciones en las que con plena seguridad y adecuada preparación puedan participar todas las fuerzas sociales de El Salvador, sea cual fuere su ideología.

Es, desde luego, una tarea inmensa, a la que hay que juntar la necesidad imperiosa de un rápido y justo crecimiento económico, sin el que las causas profundas y seculares de la actual crisis no pueden ser superadas. ¿Puede hacer algo serio y efectivo el presidente Duarte en estos puntos imprescindibles para democratizar el país?

Duarte ya estuvo en el poder de 1980 a 1982. Un poder compartido,





pero un poder presidencial, al fin y al cabo. En ese período hizo dos cosas importantes. Dio pasos efectivos en reformas estructurales importantes, tales como la reforma agraria, la nacionalización de la banca y la nacionalización del comercio exterior. En segundo lugar, posibilitó unas elecciones en las que, por primera vez en los últimos cincuenta años, no las ganó quien estaba en el poder.

Pero junto a estos logros importantes, hay que decir que en ese mismo período el proceso de democratización fue trágicamente para atrás. Los asesinatos políticos estuvieron a la orden del día hasta llegar bajo su mandato a 25.000, de los cuales muy pocos fueron seriamente investigados y, menos aún, llevados a juicio, a pesar de que entre las víctimas estaban el arzobispo de San Salvador, Mons. Oscar Arnulfo Romero y otros diez sacerdotes, los máximos dirigentes políticos del FDR en el país, el rector de la Universidad Nacional, varios ~~cientos~~ cientos de correligionarios de su partido... Se dió en ese tiempo lo que la OEA llamó un terrorismo de Estado, en el que estaban involucrados escuadrones de la muerte, grupos paramilitares, cuerpos de seguridad y elementos del ejército, como lo reconocen las Naciones Unidas en sus sucesivas condenas de las violaciones de los derechos humanos en El Salvador. El poder civil fue impotente para imponer su autoridad. La guerra se agudizó. La intervención norteamericana en los asuntos internos del país creció más y más.

¿Tenemos tras las elecciones de 1984 alguna razón para pensar que las cosas puedan cambiar sustancialmente? Podría pensarse que tras el triunfo electoral -la vez anterior Duarte subió al poder tras



un golpe de estado- Duarte tendrá mayor poder y esto, junto con el cambio de algunas circunstancias importantes, le permitirá hacer lo que no pudo hacer en su anterior mandato. Pero este argumento es un tanto especioso, porque en un país como El Salvador en el momento actual el triunfo en las elecciones dan el poder (Macht) de la presidencia pero no dan la fuerza (Kraft) suficiente para poder gobernar. En los votos puede estar la autoridad moral, el apoyo internacional, la mejora de imagen y alguna cuota de fuerza. Pero todo ello no es suficiente para gobernar de manera efectiva en El Salvador y menos en estado de guerra.

Duarte tiene ciertamente otros apoyos. Ante todo, el apoyo firme, aunque condicionado, de Estados Unidos, de la administración Reagan. Firme, porque la presencia de Estados Unidos en El Salvador es decisiva; condicionado, porque el apoyo dependerá de que Duarte resulte útil a los planes que Reagan tiene para El Salvador y para toda el área centroamericana. Con este apoyo, Duarte puede confiar en que no va a haber golpe de estado militar; puede confiar en que no va ser derrotado y derrocado militarmente por la guerrilla; puede confiar en que la empresa privada no le vaya a hacer un boicot absoluto; puede confiar en que no vaya a darse un colapso económico. Más aún, esta fuerza, que viene de la presencia de Estados Unidos en El Salvador, puede darle una cierta capacidad de maniobra, subordinada, eso sí, totalmente a no impedir ni siquiera dificultar la victoria militar contra el FMLN, tal como la tiene programada el Pentágono.



Los otros apoyos son mucho más débiles. La presidencia misma da en



El Salvador tradicionalmente bastante poder, pero lo da, mientras se conserva. En cualquier momento se puede perder, si no se cuenta con la fidelidad de la Fuerza Armada, la cual puede dejarse, como es tradición en América Latina y en El Salvador por múltiples pretextos. Los que han votado a favor de Duarte difícilmente se decidirán a defender su voto, si esto les exige altas cuotas de sacrificio. Lo mismo debe decirse de la UPD y del "Comité permanente por la paz, la democracia y la justicia social en El Salvador", que engloba un conjunto de organizaciones, que dicen representar a más de un millón de salvadoreños.

Pero frente a estas fuerzas favorables están los problemas reales y las fuerzas contrarias. Los problemas son de por sí gravísimos y ofrecen por sí mismos enormes dificultades: la guerra, la destrucción del país y la paralización de la economía, la tensión social y la polarización de los intereses y de los ánimos, la secular y extensa injusticia estructural que ha suscitado un poderoso movimiento revolucionario, la crisis centroamericana, las presiones internacionales. Casi todo está por hacer o por rehacer.

Lo peor, sin embargo, no es la dificultad de los problemas sino la oposición de fuerzas poderosas. La gran empresa privada de El Salvador que aliada con la oligarquía tiene una enorme capacidad de maniobra en todos los ámbitos nacionales, está en principio contra Duarte y a favor del partido opositor de extrema derecha, A RENA. Este sector empresarial está en contra del programa reformista del PDC y tiene una animosidad especial contra Duarte y contra su anterior gestión presidencial. Con esta empresa privada en contra será casi imposible el desarrollo económico y sin éste será



muy difícil la paz social. Aunque hay síntomas de posibles arreglos pragmáticos, la oposición de fondo permanecerá y no pueden excluirse claras maniobras de desestabilización. Esa oposición será conducida políticamente por ARENA, que representa los intereses de la empresa privada y de la oligarquía. Tras ese partido y en contra del PDC hay más de 600.000 votantes, que pueden ser movilizadas con facilidad.

Tampoco podrá contar con la Fuerza Armada como aliado seguro. La Fuerza Armada que está dejando de ser pro-ARENA y pro-empresa privada organizada, no es todavía pro-Duarte, sino que ha empezado a dejar de ser contra-Duarte. Esa Fuerza Armada va a ser intocable para el poder civil. Esto va a hacer muy difícil aclarar comportamientos del pasado, responsabilidades más o menos ocultas en que hayan podido incurrir. Esto mismo va a hacer difícil terminar con la violación institucional de los derechos humanos. La guerra y el peligro de la llamada subversión van a seguir justificando acciones que no tienen justificación alguna en países democráticos. Pero se darán razones de Estado y de Seguridad nacional, cuando no toscos pretextos anti-comunistas para perpetuar situaciones que se han hecho trágicamente habituales.

El FMLN será también un duro opositor de la política de Duarte, en cuanto ésta se pleiga a la política de Reagan. Lo será en la guerra y en el sabotaje, pero lo será también en la ciudad y en el campo. Al menor asomo de apertura política y de seguridad pública, la latente fuerza revolucionaria de un pueblo acosado por la falta de trabajo, por la insuficiencia de los salarios, por





la inflación, se hará de nuevo presente en la calle y en la fábrica, en la universidad y en la escuela, en los sindicatos y en los habitantes de tugurios. Esta explosión difícilmente podrá ser controlada si no es por el terror. Y entonces Duarte y los americanos tendrán que elegir entre el terror de la violencia o el respeto a la protesta no armada, que puede terminar en insurrección popular.

No es, pues, muy claro el horizonte para Duarte. Por otro lado, la situación es de tal gravedad, dinamismo y complejidad que serán los acontecimientos los que le dirijan a él más que él a los acontecimientos. Es posible que en cinco años cambien mucho las cosas, pero este cambio se deberá a la lógica de los acontecimientos mismos, a la lógica que imponga la guerra y a la voluntad de Estados Unidos sobre el área.

Duarte va a caer probablemente en su propia trampa. Va a pensar que el primer principio de la democratización es el mantenimiento del orden institucional. Y por tal va a entender el que no le echen de la presidencia y el tener elecciones a su tiempo. En realidad durante los próximos diez meses hasta las próximas elecciones apenas podrá hacer otra cosa que prepararse para no perderlas. En esos diez meses se habrá perdido mucho tiempo para hacer otras cosas. Luego puede resultar demasiado tarde. Tarde si pierde las próximas elecciones de alcaldes y diputados; tarde también si es que vuelven a encontrar acomodo en las propias instituciones del Estado las fuerzas no democráticas. La ilusión de las elecciones puede llevar a desconocer la esencia de la democracia, que sólo puede construirse por un proceso de democratización, al que de



momento no se le ven muchas posibilidades en El Salvador. Peor hubiera sido si hubiera ganado ARENA, pero las buenas intenciones democristianas pueden estrellarse contra las dificultades reales y contra las exigencias objetivas de un proceso de negociación.

Ignacio Ellacuría

